APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN

AL 17 DE JUNIO DEL 2020

Una adecuada apreciación de la situación, guarda relación con lo vivido en un determinado momento del proceso evolutivo de un determinado cuerpo social, en comparación con lo ocurrido a esa sociedad en un tiempo pretérito, por ejemplo, con referencia a como era nuestro país en la primera mitad del Siglo XX, con conflictos laborales que buscaban, en gobiernos radicales, las posibilidades de superar los problemas sociales y ,con una clase media que comenzaba a crecer con un sentido de sobriedad muy impresionante y que fue construyendo una tendencia política basada en tres tercios (izquierda-centro y derecha) pero, siempre, con una determinada tendencia de centro izquierda.

Entrando a la segunda mitad del SXX, vemos la emergencia, desde la clase media, de una fuerza política, la Demócrata Cristiana, con un sentimiento social materializado en lo que definieron como “La Revolución en Libertad”, liderada por el Presidente Eduardo Frei Montalva, pero, cuyo efectivo impacto social no pudo evitar el ingreso a la Moneda del gobierno de la “Unidad Popular”, de Izquierda Socialista - Comunista, encabezada por el Presidente Salvador Allende Gossens, quien asumió el gobierno el 3 de noviembre de 1970 iniciando un proceso de acelerado cambio social y económico, que produjo la destrucción de las estructuras productivas, una alta inflación y un generalizado desabastecimiento, lo que generó una profunda insatisfacción ciudadana y una peligrosa confrontación social, con amenaza de una posible Guerra Civil.

Lo delicado de la situación dio origen a variadas opiniones. Las más importantes:

1. Los obispos de Chile difundieron un mensaje que termina con la frase ”No representamos ninguna posición política, ni ningún interés de grupo, sólo nos mueve el bien de Chile, tratando de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratricida”
2. La Corte Suprema representó a Allende “la perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país”
3. El 23 de Agosto la Honorable Cámara de Diputados, publicó un lato acuerdo que en su artículo 15 dice a la letra: Representar a su Excelencia el Presidente de la República y a los Señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República….

El 11 de septiembre de 1973, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, interpretando el sentir de las grandes mayorías nacionales, destituyó al Presidente Allende, asumiendo una Junta de Gobierno integrada por el Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet Ugarte, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante José Toribio Merino, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea General del Aire Gustavo Leigh Guzmán y el General Director de Carabineros César Mendoza Durán.

El presidente Salvador Allende se suicidó en la Moneda

De esta manera, se inició un proceso de recuperación nacional, adoptándose importantes y novedosas medidas económicas y de contenido social, que terminaron con el desastre en que la Unidad Popular dejó al país, pudiéndose retomar su tradición democrática con la elección del Presidente Patricio Aylwin Azocar, con lo que se dio inicio a los Gobiernos de la Concertación de Partidos Por la Democracia.

Sobre estas bases, se da inicio al período más virtuoso de la historia de Chile, con un crecimiento sostenido de su economía, con una potente participación privada en los planes de desarrollo, un crecimiento de la clase media y la consecuente reducción de la pobreza, todo esto, complementado con una apertura al mundo, vía Tratados de Libre Comercio y concesiones de infraestructura, lo que le cambió el posicionamiento y reconocimiento a nuestro país por parte de la comunidad internacional.

En este Chile nos desarrollamos como sociedad y como personas, teniendo la oportunidad de acceder a posibilidades y bienes nunca antes vistos, que se fue consolidando con los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, donde, pese a lo anterior, se empezó a producir una división interna entre los “Auto Complacientes” y los “Auto flagelantes”, aumentando la importancia de estos últimos en el primer gobierno de la Presidente Michelle Bachelet Jeria (2006 al 2010) que, con sus ineficientes políticas de estado, logra bajar la curva ascendente, para entrar en un proceso de mediocridad poco trascendente, que termina llevando a que el próximo Presidente de la República, sea un personaje de la Centro Derecha Nacional, Sebastián Piñera Echenique (2010 al 2014).

En este gobierno del Presidente Piñera, el país retomó la senda del crecimiento, logrando hacerlo a un ritmo del 5,3% en comparación al 3,3% del Gobierno de Bachelet, lo que significó la creación de un millón de nuevos empleos y, tuvo importantes aciertos como fue el caso del rescate de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad luego del derrumbe de la Mina San José en la Comuna de Caldera, como así mismo, en la recuperación de los daños dejados por el terremoto y tsunami ocurridos a fines del gobierno anterior. En los aspectos negativos es destacable el llamado movimiento estudiantil, con protestas y tomas particularmente violentas durante el año 2011, que afectaron su aprobación popular, llevándola hasta un 25% en agosto del mismo año, para luego ir recuperando su respaldo hasta llegar a, 50% al momento de entregar su gobierno.

Pese al buen resultado de su gestión y a los índices positivos de apreciación ciudadana, Sebastián Piñera entregó la banda presidencial a Michelle Bachelet quien, por segunda vez ganó la elección presidencial, gracias a su carisma personal y a los errores y desencuentros políticos entre los eventuales candidatos de la centro derecha, que tuvieron una seguidilla de cambios, hasta llegar desestructurados a la elección.

En esta oportunidad, la Presidente Bachelet llegó al gobierno apoyada por la coalición política “La Nueva Mayoría”, integrada por los partidos de la antigua Concertación más el Partido Comunista, con un agresivo programa de cambios, representados por la alusión a la “Retroexcavadora” del senador Quintana, que generaron un rápido impacto negativo en la economía y la gestación de un ambiente de confrontación con agresivas descalificaciones, que no le hacían ningún bien a la ya maltratada democracia, incluso, se inició un proceso de consultas y cabildos para cambiar la Constitución, el que no alcanzó a concretarse, por la perdida de respaldo a su gobierno, por su muy mal resultado y, el daño a la imagen de la President**a** que fue seriamente afectada por lo que se conoce como el “Caso CAVAL”, que comprometía a su nuera y a su hijo, en unos oscuros procesos de adquisición de terrenos que cambiarían de destino y que generarían un tremendo negocio al ser vendidos para fines inmobiliarios. Finalmente, y con un 70% de desaprobación, entrega el gobierno, por segunda vez al Presidente Sebastián Piñera Echenique.

El Presidente Piñera inicia su gobierno haciendo los ajustes necesarios junto a las señales para impulsar la inversión que, en su primer año, logra un crecimiento del 4%, muy superior al 1,7% promedio anual de la anterior administración, pero tuvo que enfrentar el problema de la inmigración que, durante el anterior gobierno fue un proceso casi sin control y con procedimientos extraños. Ello empezó a impactar en la masa laboral por la llegada de personas de baja calificación, a lo que se sumó un incremento de la actividad terrorista en la Araucanía, con un incentivo especial por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Otro asunto lamentable fue el rebrote del movimiento estudiantil, con manifestaciones violentas en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional y distintas marchas de carácter social como la de “No más AFP” y las de los movimientos feministas, por nombrar algunas, frente a las cuales, mostró incapacidad política, comunicacional y de efectivo control, con los medios que le otorga el estado de derecho.

Esta situación, terminó dando inicio a lo que se ha definido como “el más grande estallido de violencia”, con una organizada evasión masiva en las estaciones del Metro, que culminó con la destrucción e incendio de las mismas, el 18 de octubre de 2019 y, a partir de esto, una multiplicación de incendios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueos y enfrentamientos con las FFAA y Fuerzas de Orden, para llegar, posteriormente, el 25 del mismo mes, a la realización de una masiva marcha de 1.200.000 en las proximidades de la Plaza Baquedano e importantes concentraciones de gente en las principales ciudades del país.

La continuidad del caos social, la desatada destrucción efectuada por grupos organizados y lo inmanejable de la situación, llevaron a los representantes de los partidos políticos, con la excepción del Partido Comunista, a firmar el 15 de noviembre, en momentos críticos para la mantención del sistema institucional, un “Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución”.

¿POR QUÉ ESTÁ OCURRIENDO LA SITUACIÓN ACTUAL?

Pretender dar una respuesta cierta y completa a tan concreta pregunta, sería pretencioso para cualquier analista y, en esta oportunidad, no se pretende intentarlo pero, no se quiere perder la oportunidad de listar hechos, que intenten explicar nuestro proceso de evolución histórica, partiendo del quiebre de nuestra democracia, cuando las FFAA y Carabineros de Chile tomaron el control, para sacar el país de la lamentable situación a que lo había conducido la experiencia marxista de la Unidad Popular.

Lo primero que se hizo fue asegurar el orden interno, para lo que fue necesario enfrentar y derrotar la subversión y el terrorismo de estructuras bien organizadas y equipadas como parte del proceso revolucionario que se había vivido con la UP, mientras se montaba la estructura cívico militar, que iniciaría el proceso de recuperación nacional, con el establecimiento de la economía social de mercado y la redacción de una Constitución Política, que garantizara los derechos y deberes ciudadanos, con sólidas estructuras institucionales, que crearáncondiciones atractivas a las inversiones privadas y al desarrollo de las iniciativas de carácter privado, lo que permitió al país generar las condiciones, para volver al sistema democrático de gobierno, según lo estipulado en la propia Constitución de 1980.

El nuevo gobierno democrático enfrentó una suerte de tutelaje político, al permanecer como CJE el General Pinochet por los próximos ocho años, y contar con el respaldo y respeto de las instituciones castrenses y parte muy importante de la ciudadanía, que reconocía la exitosa obra de reconstrucción nacional del gobierno militar.

Esta situación no era políticamente aceptable y eso condujo a un accionar sistémico de recuperación del Poder Ejecutivo, en sus ámbitos internos como internacionales, donde se montó un sistema donde el progreso logrado por el gobierno militar fue persistentemente opacado por el tema de las violaciones de los derechos humanos, para lo que se creó la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” o Comisión Rettig que, luego de nueve meses de trabajo, entregó un informe con 2.298 casos de victimas de violaciones de los derechos humanos y víctimas de violencia política con resultado de muerte.

Esta cifra, que no guarda relación con la magnitud de otras de características similares, producidas durante la gestión de fallidos gobiernos militares en la misma América Hispana, ha sido usada efectiva y eficientemente, para transformar a nuestro Gobierno Militar en una “Feroz Dictadura”, figura simbólica que hoy en día, nadie osaría cuestionar.

Otro tanto pasó con el Poder Judicial, al cual se le acusó de incompetencia y complicidad con el régimen, no atendiendo los recursos de amparo y otras consideraciones jurídicas, en tanto, se cambiaban los antiguos Ministros por nuevos, de una tendencia ideológica de izquierda y esto, no solo en la Corte Suprema, principal objetivo, sino que en los distintos niveles de la judicatura, hasta llegar a un nivel de control que, lamentablemente, ha redundado en un desprestigio de tal nivel que mantiene a esta estructura fundamental de toda democracia, en los últimos niveles de la apreciación ciudadana.

El Ministro de Justicia del Presidente Aylwin fue el impulsor de las llamadas “Leyes Cumplido”, que modificó la ley de conductas terroristas, inició la derogación de la pena de muerte (2001) y el reforzamiento de los derechos de las personas en el proceso penal, avanzando en una legislación más garantista y su impacto en la capacidad de todo gobierno, de cumplir con su obligación de resguardo del Estado de Derecho.

Desde esos años se llevan a cabo actos terroristas en la Región de la Araucanía, que van aumentando con el paso del tiempo y con el apoyo de ONG’s de cuestionables líneas de financiamiento, lo que, sumado a una falta de voluntad política de resguardo del orden, la propiedad y la vida de las personas, ha llevado a que, en esta región, existan sectores donde no entran las autoridades del estado y se arman grupos de interés, que plantean niveles de autonomía en la gestión de gobierno de esos territorios.

Siguiendo con las modificaciones, el año 2000, se inicia el mayor cambio estructural de la Justicia Penal de nuestro país con la “Reforma Procesal Penal”, que terminó con el sistema inquisitivo para pasar a un sistema acusatorio, en que los Fiscales eran los encargados de investigar y presentar los casos para que, los Jueces, aplicando la ley, hicieran justicia. El sistema parecía satisfacer mejor la forma de hacer justicia, pero, lamentablemente, la libertad con que asumen las investigaciones o archivan las causas, más algunas actuaciones públicas cuestionadas, han llevado al desprestigio del sistema hasta llegar a compartir la mala evaluación de la Justicia como un todo.

Ahora, nos queda el Poder Legislativo. Que en su inicio de funciones tenía una Cámara de 120 Diputados y un Senado con 50 legisladores, que eran elegidos sobre la base de un sistema electoral binominal, que inducía a la conformación de grandes bloques políticos y, en el caso del Senado contaba con nueve senadores institucionales que eran nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional (4), el Presidente de la República (2) y la Corte Suprema (3), a los que se sumarían los Ex Presidentes de la República en condición de vitalicios. El aporte de estos personajes de indiscutidas capacidades personales y trayectorias profesionales fue muy importante para el funcionamiento del Senado, pero, su existencia terminó el año 2006 según las modificaciones constitucionales hechas durante el Gobierno del Presidente Lagos.

El próximo paso fue terminar con el sistema binominal, reemplazándolo por uno de carácter proporcional inclusivo (sistema D’Hont), que permite obtener el número de cargos electos, en proporción a los votos obtenidos por las distintas listas que se presenten a la elección. Este sistema, permitió elegir 50 Senadores y 155 Diputados, algunos de ellos, obteniendo un 1% de los votos de su circunscripción o distrito, dependiendo de la votación del más potente de su lista.

Con este sistema, entraron al Congreso personajes sorprendentes, algunos divertidos por no decir ridículos, que han contribuido con impresionante efectividad a que el Congreso dispute, con el Poder Judicial, las últimas evaluaciones ciudadanas.

Finalmente, y para rematar esta lista de modificaciones, de cuestionable resultado positivo, las estructuras de Seguridad Nacional tuvieron importantes cambios. Primero fue un desmantelamiento de la estructura de inteligencia Nacional, que soportaba la pesada carga de la existente durante el gobierno militar, eliminando lo que había y creando un sistema que, al poco andar, dividió la participación de las instituciones que colaboraban con el necesario proceso de integración de informaciones, para dejarlas, a cada una, con un campo de acción específico, sin la enriquecedora alimentación transversal. El resultado no requiere ningún tipo de análisis.

Con respecto a las FFAA y Fuerzas de Orden, se terminó con la inamovilidad de los Comandantes en jefe y General Director de Carabineros, se reestructuró y dejó sin efecto práctico el Consejo de Seguridad Nacional y se trasladó Carabineros de Chile al Ministerio del Interior.

Finalmente, y frente a una sociedad en constante evolución, con un importante empoderamiento de la sociedad civil, y la falta de temor para desafiar las Fuerzas de Orden y Seguridad, vemos a estas, impotentes y limitadas en el empleo de sus legítimos medios para preservar el Estado de Derecho, como consecuencia de una despiadada acción de las estructuras asociadas a DDHH y una falta del necesario respaldo político.

Consecuente con estas consideraciones, ¿Es posible esperar algo distinto?

¿ES ESTO UN SITUACIÓN SOLO NACIONAL?

Existe un importante número de analistas políticos que están planteando que, lo que está pasando en nuestro país, siendo un proceso sistémico propio, no se puede considerar al margen de lo que vemos en el resto del mundo, donde las estructuras internacionales que se fueron creando desde el término de la Segunda Guerra Mundial, han entrado en un proceso de obsolescencia e inoperancia para resolver los problemas internacionales, que nos muestra día a día, situaciones catastróficas de destrucción y muerte que, lamentablemente, han dejado de llamar la atención.

Es más, luego del término de la Guerra fría y la caída del muro de Berlín, estas instituciones internacionales, sirvieron de refugio a quienes habían quedado marginados de las estructuras derrotadas en ese enfrentamiento ideológico, transformándose en un espacio, en un refugio, desde el cual podían ejercer la influencia que sus convicciones les imponía y esto, legitimado por el nuevo orden.

Esta estructura internacional ideologizada, fue activando los movimientos feministas, de la diversidad sexual LGBT, de las minorías étnicas, de los anti homofóbicos, de los abortistas, de los Derechos Humanos con exclusión de los agentes del estado entre otros, movimientos que fueron abriendo espacios a manifestaciones públicas legítimas, pero que, empleando actitudes desvergonzadas y agresivas, fueron desafiando a un público mayoritario que, por no sentir que este tipo de temas era de su particular interés, los observaba pasivamente o con muy débiles reacciones, sin visualizar la forma en que se modificaba la estructura social de su entorno.

En este mismo ámbito internacional, se ha ido observando un grupo de poder que busca la instauración de un “Gobierno Mundial”, un viejo sueño que se remonda a las estructuras imperiales y que, frente al debilitamiento de las democracias occidentales, ve la oportunidad de materializar su sueño, apoyados en las estructuras internacionales ya mencionadas, en la generación de ONG´s que activan y apoyan los movimientos sociales que desestabilizan los gobiernos, en el sistema de comunicaciones que controlan en forma mayoritaria y, en los movimientos estudiantiles que han ido ideologizando a través de procesos educativos sistémicos.

En este escenario, pareciera que nuestra concepción de estructuras políticas de derecha, centro e izquierdas está quedando obsoleta, siendo reemplazada por los “Progresistas” versus los “No Progresistas”, que suelen ser calificados de conservadores, cómplices pasivos, retrógrados o fascistas y, con este esquema, se va forjando una horda de “populistas”, que emergen de ambos grupos y que pretenden satisfacer lo que se plantea en las encuestas, para seguir contando con la simpatía y el respaldo electoral, olvidando de paso, la superior responsabilidad que asumieron con el juramento de cumplir con el compromiso de ser fieles a sus convicciones y ser consecuentes con ellas, para el beneficio de las actuales y futuras generaciones de compatriotas.

Ciertamente, lo anterior no es fácil, más aún, cuando tenemos una estructura informativa que está permanentemente cuestionando lo que hace la conducción de los países, dejando de lado los avances que se están logrando, para resaltar aquellos aspectos que generan insatisfacción en la gente que, por repetidos, se convierten en realidad y, en reacciones populares, que terminan en manifestaciones con destrucción de bienes y del espacio público, sin resolver nada.

El Brexit en Inglaterra, los chalecos amarillos en Francia, el 18 de octubre en Chile y los similares desordenes sociales en Estados Unidos, no son más que una expresión de la existencia de un “Poder Oculto”, que mueve los hilos, según una clara estrategia en su afán globalizante.